

Privatizar para rescatar al Estado

Miguel Ignacio Purroy

En ciertos círculos, el tema de la privatización se discute todavía con desagrado y resignación al ver que el proceso avanza inexorablemente. Se da por supuesto que no es "progresista" privatizar, pero la realidad es que el progreso está siendo hoy liderizado por los antiguos "conservadores". Definitivamente, el mundo de hoy no es el de hace diez o quince años, incluyendo Venezuela. No reconocerlo significa ceder a otros el liderazgo del pensamiento y de la acción.

NUEVO CONTEXTO MUNDIAL

El último cuarto del Siglo XX está siendo testigo de una transformación dramática del escenario ideológico, político y social a nivel mundial. Estamos presenciando el avance arrollador de sistemas políticos de corte liberal-democrático, conjuntamente con sistemas económicos de libre mercado. A nivel ideológico, las utopías sociales equitativas, solidarias y humanistas están siendo sustituidas por tecnologías pragmáticas para maximizar el consumo material individual.

El acceso al consumo en un clima de libertades económicas individuales ha demostrado ser el "ideal" de la gente, al tiempo que otros viejos ideales como la justicia social, el acceso a los medios de producción, la cultura o la solidaridad van siendo relegados al desván de la historia. El fetiche del consumo está logrando a pasos acelerados lo que la utopía revolucionaria marxista no logró en dos siglos: erradicar la contradicción de clases sociales. Se han ido disipando las grandes contradicciones sociales e ideológicas, que movieron la historia durante los últimos dos siglos.

Lo ocurrido en Europa del Este corro-

bora lo anterior. El derrumbe estrepitoso de los sistemas políticos y económicos comunistas refleja la derrota definitiva e incuestionable de esquemas de desarrollo económico basados en la planificación estatal centralizada, así como de formas colectivistas de organización de la sociedad. Después de medio siglo de competencia, el occidente capitalista ha ganado por K.O. técnico. La vía socialista no ha sido capaz de brindar lo que aparentemente es la máxima aspiración de la gente: bienestar material en un clima de libertad individual.

TERCER MUNDO: DE LA NEGOCIACION A LA RENDICION

Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre las repercusiones de los acontecimientos de Europa del Este en los países tercermundistas, recalcando la posible pérdida de interés de la inversión extranjera en estos últimos. Pero ese riesgo no es nada comparado con el cambio radical que desde hace una década se viene produciendo en la relación entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Lo que en un tiempo fueron relaciones antagónicas con cierta capacidad de negociación (recuérdense el Grupo de los 77, la Comisión Norte-Sur), ha desembocado hoy en una dominación abierta. Y no se trata ya solamente de la vieja dominación tecnológica o económica, sino que ésta se manifiesta ahora también en la imposición de esquemas neoliberales tanto para el funcionamiento mismo de las economías internas, como para la inserción forzada en el comercio mundial.

Pero esta apertura al exterior en nada se parece a la vieja aspiración de inserción negociada en un "nuevo orden económico internacional", porque ahora se trata de una absorción incondicional por parte de uno de los tres centros hegemónicos (EE.UU., Europa Comunitaria, Japón). Para países como el nuestro, éste

es el significado real del concepto de "globalización". Dentro de estos esquemas, el repliegue del Estado del ámbito económico es una pieza clave. En este contexto deben entenderse las actuaciones del FMI y el Banco Mundial.

ANQUILOSAMIENTO DE LAS IDEOLOGIAS "PROGRESISTAS"

Es comprensible que la "intelectualidad progresista" de estas latitudes subdesarrolladas se resista a aceptar los esquemas impuestos. No exageran quienes proclaman —alborozados o compungidos— el desmoronamiento de las ideologías "progresistas". A nuestro entender, el vacío ideológico tiene mucho que ver con el anquilosamiento de posiciones. Definitivamente, es tiempo de revisar unos cuantos postulados ideológicos, no importa cuán arraigados estén y cuán queridos sean para quienes siempre hemos sustentado el quehacer intelectual en la búsqueda de la utopía de la equidad social. De no hacerlo, hasta la utopía misma corre peligro de sucumbir.

Por este motivo, el debate sobre la privatización se torna tan interesante, ya que está teniendo el beneficioso efecto colateral de poner al desnudo el fracaso de esquemas ingenuamente voluntaristas, donde se creía que la acción planificadora e interventora del Estado sería capaz de enrumbarnos hacia niveles más equitativos de bienestar. Estábamos tan ocupados pontificando sobre lo que el Estado debía hacer, que no reflexionábamos sobre lo que podía hacer. Fuimos tan ingenuos como para olvidar que es la sociedad quien hace al Estado, y no a la inversa. Pensábamos que la racionalidad política se impondría sobre racionalidad económica del subdesarrollo, generadora de inequidad.

HACIA LA HOMOGENEIDAD NEOLIBERAL

Mucho se podría hablar sobre este apasionante tema. Una cosa está clara: la polémica sobre el Estado en Venezuela no puede encerrarse dentro de nuestro pequeño marco localista y coyuntural. Estamos ciertamente conscientes de que no se pueden extrapolar simplistamente sucesos de otras latitudes y de que es fundamental tener en cuenta en qué nivel de desarrollo se encuentra cada sociedad. Pero no es menos cierto que se acentúa día a día la presión hacia la globalización, hacia la homogeneidad a nivel mundial.

Esta presión tendrá consecuencias muy concretas para Venezuela. Primera: La "globalización" impuesta en la esfera de

lo económico hará inviables los sistemas económicos mixtos (capitalismo de Estado/capitalismo privado, capitalismo/socialismo), en los que el tercer mundo cifró tantas esperanzas durante más de medio siglo. Vienen décadas de capitalismo privado puro y simple, donde el mercado será el regulador y el Estado únicamente atenderá sus funciones públicas irrenunciables. La inversión y el crecimiento dependerán exclusivamente del dinamismo, del espíritu innovador y de la capacidad empresarial de los individuos y corporaciones privadas. La distribución del ingreso no estará en función de las políticas estatales, ya que dependerá del nivel de la productividad y de cómo las mismas fuerzas productivas negocien su participación en ella.

Segunda: La globalización abarcará también la esfera de lo político. Quedarán descolgados del tren del desarrollo los Estados o sistemas políticos socializantes, populistas, fascistas o como se quiera denominar a todo lo que no es liberal-democrático.

¿OPORTUNIDAD HISTORICA O FRACASO?

Ante estos dos hechos, algunos podrían sentirse tentados a abandonar en una resignación melancólica. Pero estamos entusiastamente convencidos de que la nueva situación plantea muchas más oportunidades y retos que fracasos. Esta es la oportunidad histórica de barrer con un sistema político y una gestión de Estado, que sólo han dejado una estela de depauperación, inequidad social y pillaje. Hay que rescatar al Estado para su función pública de garantizar a los ciudadanos su seguridad pública, su salud, su educación, su desarrollo cultural, su seguridad social, su protección jurídica.

Esta es también la oportunidad histórica de impulsar un capitalismo de verdad. Si el neoliberalismo económico es la única vía posible en el actual concierto mundial, trabajemos para que se repita en nuestro mundo subdesarrollado el mismo éxito social que lo ha caracterizado en los países desarrollados. Es falso que la inequidad social y la depauperación nos hayan sido impuestas por nuestra condición de dependencia, al igual que es falso que la prosperidad de las sociedades desarrolladas se haya construido sobre las ruinas de sus colonias. Lo cierto es que, por razones muy complejas que no es éste el momento de explayar, en el mundo subdesarrollado han sido sistemáticamente bloqueados los mecanismos de difusión social del progreso tecnológico y económico. Ha funcionado el círculo

malévolo de que al no hacer partícipe a la población de los frutos del progreso tecnológico no mejoraba la productividad y al no mejorar la productividad no se generaba riqueza distribuible.

El mejor servicio que el Estado pudiera prestar a la sociedad venezolana es crear las condiciones para que ese círculo "malévolo" del capitalismo subdesarrollado se transforme en el círculo "virtuoso" característico de las sociedades capitalistas desarrolladas. Eficiencia y productividad son los objetivos de nuevo programa económico, pero sin difusión social de los frutos de la mayor productividad volveremos a caer en el círculo malévolo. Esa correlación estrecha entre equidad social y bienestar económico no es en absoluto casual, sino que pertenece a la esencia del "buen" capitalismo.

II PROS Y CONTRAS DE LA PRIVATIZACION

A pesar de lo apasionante del asunto, el objetivo de este artículo es mucho más modesto y se limita a discutir el tema de la privatización en Venezuela, comentando sus pros y sus contras. Quisiéramos insistir en el hecho de que estamos frente a una oportunidad histórica de rescatar al Estado para su verdadero papel frente a la sociedad y al desarrollo.

Dos advertencias previas: el concepto de privatización de empresas o instituciones públicas es más amplio que el simple mecanismo de vender o traspasar esas empresas/instituciones a manos del capital privado. Privatizar significa retirarse el Estado de una actividad determinada, para lo cual puede vender, regalar, arrendar, hacer contratos de gestión, desbloquear áreas antes reservadas al Estado o simplemente liquidar las empresas e instituciones públicas que desempeñan esa actividad. Tampoco es relevante si el receptor de la actividad estatal es un capitalista privado, los trabajadores o una asociación de vecinos. Todas estas cosas pertenecen ya a las estrategias concretas de privatización, que variarán con cada tipo de actividad o institución.

La segunda advertencia es que no merece siquiera la pena discutir la privatización de la gran mayoría de las 400 empresas públicas, que cayeron en manos del Estado de forma totalmente accidental e involuntaria y cuya razón de ser económica es insostenible. Son actividades en las que el Estado nunca debió estar, como es

el caso de un sinnúmero de empresas públicas industriales en el sector alimenticio, agroindustrial, cementero, transportista, hotelero o financiero. La discusión debe centrarse en aquellas áreas donde el Estado consideró que debía estar y donde su intervención fue planificada, como sucedió con las industrias básicas, el transporte aéreo y marítimo o los servicios de agua, luz y telecomunicaciones.

DEFICIT FISCAL INSOSTENIBLE Y CONTAGIO DE LA INEFICIENCIA

En realidad, toda la discusión sobre la conveniencia o no de la privatización en Venezuela se podría terminar al constatar un solo hecho: el déficit de las empresas públicas ya no es soportable para el Fisco Nacional. Para este año de 1990 se está estimando una cifra entre 170.000 y 200.000 millones de bolívares, lo cual representa alrededor de la tercera parte del presupuesto nacional consolidado. Tamaño "desaguedero" anula cualquier esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas, aparte de que representa un costo social indefendible en términos de abandono de otros gastos sociales en salud, educación, seguridad, etc. A la vista de estas cifras, es ingenuo debatir sobre el destino de los ingresos petroleros adicionales, porque cada dólar adicional tendrá que ir necesariamente a cubrir el déficit fiscal, a no ser que pretendamos lanzar a la economía por el despeñadero de la inflación.

Aparte del aspecto fiscal, la ineficiencia y altos costos del sector público productor de bienes y servicios ejerce una nefasta influencia sobre el conjunto de la economía. No hay empresas competitivas en un contexto global ineficiente. La sociedad y la economía deben ser primero eficientes. Por este motivo, la privatización se convierte en una pieza esencial de la estrategia de elevar el nivel de eficiencia del país para crecer hacia afuera.

LAS INDUSTRIAS BASICAS Y SU IMPACTO SOBRE LA EXPORTACION

Mencionemos tres áreas donde se evidencia el impacto negativo sobre la eficiencia. En el caso de las industrias básicas públicas (petroquímica, acero y aluminio), que suplen de materias primas a las industrias procesadoras "aguas abajo", ya se está observando un franco retroceso de la exportación debido a dos factores. El primero no guarda relación directa con la ineficiencia de las empresas públicas, sino que se deriva de la directriz fondomonetarista de fijar precios internacionales para el mercado interno. Mucho se podría discutir sobre esta política,

sobre todo por el hecho de que estas industrias básicas utilizan un alto componente de energía, que se supone es nuestra principal ventaja comparativa y que debería ser trasladada a la industria nacional en forma de precios más bajos. Al no hacerlo se está excluyendo de facto a la industria procesadora nacional del negocio de la exportación, que debe cargar adicionalmente con el sobrecosto de la ineficiencia global.

El segundo factor sí tiene que ver con la ineficiencia de las empresas básicas y se manifiesta en los sobrecostos derivados de la irregularidad de las entregas, que obligan a mantener altos inventarios e incumplir en las entregas, así como de la baja calidad de los insumos, que aumenta el desperdicio y la producción de segunda. Por otra parte, las enormes cargas financieras de esas empresas, su exceso de mano de obra y su baja productividad les impediría, aunque quisieran, trasladar hacia la economía interna las ventajas comparativas de los recursos naturales y energéticos abundantes.

El problema de las empresas básicas públicas reviste especial importancia por el hecho de que el Estado está bloqueando las potencialidades de exportación manufacturera precisamente en la únicas áreas donde el país goza de ventajas comparativas. De ahí la vinculación estrecha entre la privatización y el futuro exportador del país.

LOS SERVICIOS PUBLICOS Y SU IMPACTO SOBRE LA EFICIENCIA

El caso de los servicios públicos tiene un impacto igualmente decisivo. Quien maneja una industria sabe el costo que representan las interrupciones del suministro de energía eléctrica o los cortes de agua. Especialmente grave es el problema de las telecomunicaciones, sobre todo en el campo de la transmisión de datos. La mayor revolución tecnológica de los últimos años en el mundo desarrollado se ha producido precisamente en este campo y es impresionante su impacto sobre la productividad y la organización del aparato productivo. Las telecomunicaciones son el sistema nervioso de las modernas sociedades informatizadas. Aquí Venezuela se ubica todavía al nivel de cualquier pobre país africano.

Un tercer ejemplo es el caso de los servicios portuarios y el transporte internacional. Este aspecto tiene tanta influencia sobre el costo del comercio exterior, como para decidir por sí solo la factibilidad de exportar o no de muchas empresas. Estudios comparativos demuestran que el costo portuario en Venezuela es el doble de otros países normalmente

desarrollados. Los fletes marítimos de importación desde Rotterdam hacia Venezuela, por ejemplo, son en promedio un 77% más altos que hacia Centroamérica. Principal responsable de esto es el monopolio de carga detentado por la CAVN, compañía estatal de transporte marítimo.

La inversión extranjera no vendrá masivamente a Venezuela mientras persista lo que ella considera una presencia "agobiante" e ineficiente del Estado. No creen en el saneamiento de la economía, mientras continúe el desaguadero de los déficits públicos. No se arriesgan a tener a una empresa pública como proveedora de sus insumos básicos. No creen posible lograr niveles suficientes de productividad y eficiencia en el actual contexto de deterioro de la infraestructura física y de los servicios básicos.

UNA AUTO-CONVERSION IMPOSIBLE

Ante este panorama desolador de la actividad económica del Estado, todos concuerdan en la necesidad de un vuelco radical. Pero hay quienes argumentan que la vía no tiene por qué ser necesariamente la privatización. Pudiera pensarse en una "auto-conversión" del sector público para hacerse más eficiente sin tener que replegarse de esas actividades. Pero tenemos que confesar profundas dudas sobre tal capacidad de auto-conversión del Estado venezolano, ya que ello significaría dismantelar la base de sustentación del sistema clientelar partidista. Los partidos políticos perderían su fuente de financiamiento, la red de la corrupción perdería sus guaridas, el sindicalismo oficial perdería sus lucrativos feudos. Sería exigirles un "Hara-kiri" demasiado heroico a los hombres que dirigen hoy la cosa pública.

En el transcurso de cualquier reconversión profunda se van haciendo necesarias decisiones radicales, que afectarán múltiples intereses de los grupos componentes. Mientras el Estado sea el dueño, el proceso de negociación entre los grupos será tortuoso y las decisiones finales estarán cargadas de consideraciones políticas y sociales. Estamos hoy observando una experiencia piloto como es el intento de auto-conversión de SIDOR. Se sabe que esa empresa de casi 19.000 obreros y empleados podría funcionar con la mitad de ese personal. Pero el primer intento de reducir la plantilla en 3.000 obreros está resultando tan traumático (y tan costoso), que ya se puede vaticinar un fracaso.

El problema de fondo radica en la descomposición moral y organizacional, que ha invadido el tejido del sistema político-partidista y que anulará cualquier

esfuerzo de reforma profunda del sector público. Ante este hecho, la única vía para rescatar en beneficio de la sociedad áreas vitales de actividad sería sustrayéndolas de la esfera estatal. Eso significa privatizarlas.

PERDIDA DE AREAS ESTRATEGICAS

Si bien es cierto que buena parte de los enemigos de la privatización únicamente están defendiendo sus feudos de privilegios o corruptelas, hay también personas serias que plantean sólidas objeciones dignas de ser discutidas. Una primera objeción se refiere al hecho de que atentaría contra el patrimonio nacional "entregar" cuantiosas inversiones, sin poder en la mayoría de los casos recuperar siquiera una fracción del costo invertido. Pero ante ello no queda más remedio que adoptar la actitud fría de quien opta por desprenderse a tiempo de un negocio fracasado, porque, de no hacerlo, sabe que las pérdidas patrimoniales futuras serán mayores aún.

Otra objeción muy común se refiere al supuesto carácter "estratégico" de ciertos bienes y servicios atendidos por el Estado. Pero un análisis desprejuiciado de cada caso nos demostraría la relatividad del concepto. Estratégica pudo haber sido la iniciativa del Estado hace 20 ó 30 años de impulsar las industrias básicas, pero de ahí a decir que el aluminio debe ser producido hoy por el Estado hay un buen trecho. Más estratégica puede ser hoy la fabricación de semi-conductores para chips de computación y a nadie se le ocurriría plantear una reserva de esa área para el Estado.

Lo único verdaderamente estratégico y básico es que el ciudadano tenga acceso a los bienes y servicios importantes a un costo y con una calidad razonables, en lo cual precisamente el Estado venezolano ha fracasado estrepitosamente. Llevando la argumentación al extremo, podría exigirse al Estado que abandone esas actividades precisamente por ser tan estratégicas. El ejemplo más a la mano es el de las telecomunicaciones. Si de lo que se trata es de evitar manipulaciones en contra del interés nacional o de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un cierto servicio, ello es perfectamente posible a través del establecimiento de un claro marco regulador por parte del Estado.

AMENAZA DE DESPIDOS MASIVOS

Objeciones surgen también a causa de la perspectiva de despidos masivos en caso de privatización. Tradicionalmente el gobierno y sus empresas han emplea-

do mucha más gente de la necesaria, no sólo por motivos de clientelismo político, sino también como una forma de distribuir la renta petrolera, lo cual no es necesariamente criticable. Lo que sí es cuestionable es que ese empleo "subsidiado" se haya generado en empresas o institutos, donde el carácter de la actividad hubiera exigido preservar la racionalidad económica. La experiencia nos ha demostrado que los subsidios deben ser directos y transparentes, y en este sentido hubiera sido preferible crear actividades especiales con el fin de generar empleo. Mejor todavía hubiera sido haber ampliado el empleo en actividades propiamente públicas, donde ha habido insuficiente prestación de servicios, como la seguridad ciudadana, la administración de justicia o la dotación de barrios.

Sin embargo, la viabilidad fiscal de esos altos volúmenes de empleo subsidiado ya no es la misma de antes. Mantener hoy ese subsidio a costa de incurrir en ingentes déficits representa un costo demasiado elevado en términos de inflación y estancamiento para el conjunto de la sociedad. Será inevitable, por lo menos en el corto plazo, la reducción de plantilla de gran parte de las empresas privatizadas. Pero lo que debe preverse es la creación de fondos de contingencia laboral con recursos provenientes de la misma privatización, que permitan la re-educación y re-ubicación de la fuerza laboral despedida. Tampoco debe olvidarse que a mediano plazo bastantes empresas privatizadas, sobre todo en el área de servicios, tendrán que emplear tanta o más gente que la actual, si quieren recuperar el atraso en que se encuentran. Este será el caso de las telecomunicaciones, el correo, los acueductos, etc..

EXTRANJERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Una cuarta objeción se remite al hecho de que únicamente el capital extranjero estará en condiciones de participar activamente en la privatización de las grandes empresas e institutos del Estado. Se requieren inversiones multimillonarias, como los 10.000 millones de dólares para los próximos 10 años en telecomunicaciones o los 6.000 millones en siderurgia, que el sector privado nacional no tendrá capacidad de afrontar. Pero más determinante que el factor inversión es el factor tecnológico. Se trata de sectores de gran complejidad tecnológica, de avances acelerados y costosos, en los que existe claro dominio por parte de unas pocas multinacionales. En otros casos la presencia extranjera se hace necesaria por



¡A mí me están socializando para la privatización!

razones de mercadeo, para garantizar, por ejemplo, la incorporación de las instalaciones turístico-hoteleras a la red de operadores internacionales, o para asegurarle mercados a las industrias básicas.

Por estas razones, la privatización implicará una presencia extranjera mucho más intensa y, sobre todo, más directa. Pero, a fin de cuentas, eso no modificará en nada la actual dependencia externa de esas áreas vitales de actividad. Incluso puede considerarse hasta más ventajoso para el país que los proveedores de tecnología y mercados estén comprometidos también con inversión de capital. Y a decir verdad, no vemos en qué beneficiaría el hecho de que los capitales fueran venezolanos. Nuestro capitalismo vernáculo ha dado abundantes muestras de afán desmedido de lucro, visión cortoplacista y falta de ética.

VISIONES SIMPLISTAS SOBRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

No podemos finalizar esta discusión de los pros y contras de la privatización sin mencionar una quinta objeción de fondo, que se refiere al hecho de que el sector privado no ha demostrado ser siempre eficiente y decente. Es ciertamente inaceptable identificar al sector público con ineficiencia y corrupción y al sector privado con eficiencia y pulcritud. Sobran los ejemplos que invalidan esta tesis. Sin ir

más lejos, en el sector público venezolano tenemos el caso de PDVSA o el Metro de Caracas, que han sabido formar una gerencia altamente calificada y mantenerse eficientes. Pero tenemos también el caso de la CVG, otro importante holding de empresas públicas, que desde hace quince años viene deteriorándose inexorablemente.

La diferencia entre PDVSA y la CVG es muy sencilla: mientras que por decisión colectiva nacional a PDVSA se le ha respetado su autonomía y su razón de ser como empresa, la CVG ha sido absorbida por el sistema político partidista-clientelar. El objetivo inicial de producir mucho y eficientemente, está siendo sustituido por otros objetivos políticos, como son los de otorgar prebendas en forma de cargos gerenciales, financiar a los partidos o subsidiar empleos.

El refrán popular de que "el ojo del amo engorda al caballo" parece apuntar también hacia una identificación de propiedad privada con mejor rendimiento. Es indudable que el afán de lucro ha sido, es y será el principal incentivo para producir y trabajar. No hay duda también de que el riesgo de pérdidas económicas para "el dueño" obliga a esmerar los controles y racionalizar el uso de los recursos. Pero esa visión del "dueño privado" no se corresponde con la realidad del moderno capitalismo, donde las grandes corporaciones tienen miles de accionistas y sus gerentes no son realmente dueños. A este nivel de las grandes corporaciones, la frontera entre propiedad privada y propiedad pública se diluye, por lo que su mayor o menor eficiencia no se puede atribuir directamente al tipo de propiedad.

EL "TALON DE AQUILES" DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Más allá, sin embargo, de estas visiones simplistas de lo público y lo privado, la estadística abrumadora de fracasos públicos en actividades económicas obliga a indagar más a fondo. Hay quienes afirman categóricamente, como el líder de la moderna filosofía gerencial, Peter Drucker, parafraseando a Adam Smith, que el Estado por su misma naturaleza no puede manejar la economía, ni siquiera mal. Quitándole la connotación dogmática, hay una buena dosis de validez en su argumentación.

Una actividad económica de un ente público suele terminar por convertirse en actividad política, donde los objetivos iniciales económicos coexisten con otros objetivos de orden moral, social o político. En ese momento desaparece esa vinculación tan esencial a toda actividad econó-

mica, que consiste en utilizar medios escasos para producir el máximo de resultado (la "racionalidad" económica). El ente público, que inicialmente pudo tener un propósito único, se transforma en una organización "multi-propósito". Y dado que los múltiples propósitos se ubican en esferas diversas y generalmente contrapuestas —la esfera económica, la esfera social, la esfera política, la esfera moral— es inevitable que esa organización pública se torne con el tiempo incongruente e ineficiente.

Siempre que una actividad pública esté sometida a la presión de intereses políticos contrapuestos, los objetivos y las prioridades se diluyen y se contraponen. Por eso las únicas actividades económicas estatales que funcionan, como podría ser el caso de PDVSA, son aquellas en las que la sociedad tiene un mismo objetivo unívoco. Ese objetivo puede ser ganar dinero, recolectar la basura o investigar la cuadratura del círculo. Lo importante es que la organización pública tenga un propósito único, tenga absolutamente clara su función económica y esté imbuida de una filosofía orientada a la eficiencia del desempeño.

Por estas razones, y no por maniqueísmos antiestatales, es que las organizaciones económicas privadas suelen aventajar a las públicas. Prueba de ello es que históricamente las actividades empresariales públicas sólo han podido ser exitosas económicamente, cuando han sido monopolios. En cuanto aparecen alternativas competitivas, las empresas públicas fracasan. La causa de ello es la multifuncionalidad que termina imponiéndoles su carácter público.

III LINEAS DE ACCION

EL RESCATE DEL ESTADO NECESARIO

Varias son las conclusiones y líneas de acción que deberíamos extraer de esta discusión. La primera y más importante es que no se debe contemplar el fenómeno como un desmoronamiento del Estado, sino como un proceso hacia el rescate del Estado necesario. La privatización servirá para deslastrar al Estado de todo un cúmulo de actividades, que lo han colocado en situación de quiebra y paralización. Servirá para destruir la base de sustentación del sistema partidista-clientelar, así como de su intrincada red de corrupción. Servirá para desbloquear el desarrollo de áreas vitales.

Hay quienes al amparo de la euforia

anti-estatal quisieran acorralar al Estado y relegarlo a funciones intrascendentes. En el fondo, estos personajes revelan una miopía enorme, porque históricamente ninguna nación ha alcanzado altos niveles de bienestar y equidad sin un Estado vigoroso. En todos los países desarrollados el Estado tiene un tamaño muy considerable y administra por la vía fiscal un alto porcentaje de la riqueza. Su intervención es muy intensa en las áreas de su competencia: creando el marco para el desarrollo de la infraestructura física, el desarrollo tecnológico, el sistema educativo, el sistema sanitario, la seguridad social, la administración de justicia, la seguridad ciudadana, las reglas del juego económico, etc., etc.

El problema del Estado venezolano no es su tamaño. Comparado con el Estado de países desarrollados, podríamos decir que tenemos un Estado raquítico. Y mucho más raquítico quedará cuando se avance en el proceso de privatización. Si hacemos las cosas bien y Venezuela se enrumba hacia el desarrollo, al final del camino deberíamos tener un Estado más fuerte, con un gasto público mucho más alto en términos relativos. Pero las áreas de actividad y las funciones deberán ser radicalmente distintas a las actuales.

Surge aquí inevitablemente el problema del sistema tributario venezolano. Difícilmente se encuentre otro sistema fiscal en el mundo con una base de tributación interna tan exigua. La carga fiscal interna representa un porcentaje ridículo del PTB (inferior al 5%), cuando en sociedades desarrolladas ese porcentaje ronda entre el 25% y el 40%. Esta debilidad del sistema de tributación venezolano conspira contra la tarea de rescate del Estado.

EL RESCATE DE LA SOCIEDAD CIVIL

La segunda conclusión es que el rescate del Estado no podrá tener éxito, si al mismo tiempo no se rescata la sociedad civil. Cada sociedad tiene el Estado que se merece, y viceversa. El Estado "rentista" tiene su correlativo en una sociedad "parasitaria", donde el éxito empresarial no se cifra en la productividad sino en la capacidad de conectarse con los negocios públicos, donde los gremios profesionales no representan a nadie sino que son apéndices del aparato partidista, donde ninguna organización civil quiere asumir la gestión de sus problemas y todo lo espera del Estado, donde el individuo sustituye el esfuerzo paciente por la viveza en apropiarse de riquezas ajenas. Tan importante como la privatización de actividades económicas será el repliegue del

Estado de las áreas invadidas a las organizaciones civiles.

La economía, como esfera de la sociedad civil, necesita también recobrar su autonomía. Está suficientemente demostrado que el mercado, a pesar de sus imperfecciones, es mejor asignador de recursos que las instancias públicas de planificación o de gestión directa. Por ello, todos los procesos de privatización desde el inicio pionero de Margaret Thatcher en Gran Bretaña han respondido a la necesidad de elevar los niveles de eficiencia de las economías. Venezuela no es excepción.

EL RESCATE DEL CAPITALISMO

La tercera conclusión —línea de acción— se refiere a la dimensión social del desarrollo, donde el capitalismo "sui generis" venezolano de los últimos 50 años ha fracasado rotundamente. Tenemos por delante el reto de re-editar el éxito social, que ha acompañado al capitalismo desarrollado. Mencionábamos más arriba el concepto del círculo virtuoso entre productividad y bienestar, que ha sido esencial en esos países. Impresiona releer hoy la tesis de Vilfredo Pareto, un importante teórico de fines del siglo pasado, que afirmaba que el Estado no sería capaz a la larga de modificar la distribución de la riqueza, ya que ésta depende exclusivamente del nivel de productividad de cada sociedad. Ambos conceptos coinciden en la visión de que el éxito económico y el éxito social son consustanciales y concomitantes.

Quizás uno de los errores conceptuales más graves en nuestro mundo subdesarrollado haya consistido en la dicotomía entre desarrollo económico y desarrollo social, entre política económica y política social. Todavía hoy escuchamos repetidamente la frase de que primero debemos lograr el crecimiento económico y luego vendrá el bienestar social. El paquete de ajustes actualmente en ejecución, por ejemplo, refleja de forma evidente esta dicotomía.

Es evidente que los actuales niveles de pobreza exigen el reforzamiento de las políticas sociales "compensatorias". Pero a la larga, ni las políticas sociales compensatorias ni los esfuerzos redistributivos del Estado obtendrán logros sociales estables: A largo plazo el único desarrollo social posible es el que está incorporado en el mismo desarrollo económico, y viceversa. Por ello, toda estrategia orientada al aumento de la productividad global de la economía, como pretende ser la privatización, debe ser apoyada sin reservas, más aún, debe ser exigida por razones sociales.